

COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PRECIO DEL PAN

Informes emitidos por los Vocales de dicha Comisión
y Moción de la Alcaldía Presidencia, interesando se
soliciten los medios precisos para la reorganización
total de la industria de fabricación y venta del pan



MADRID
Imprenta Municipal

1923

COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PRECIO DEL PAN

Informes emitidos por los Vocales de dicha Comisión
y Moción de la Alcaldía Presidencia, interesando se
soliciten los medios precisos para la reorganización
total de la industria de fabricación y venta del pan



MADRID

Imprenta Municipal

1923

Requerido por el Sr. Alcalde para que dé mi opinión sobre la forma de resolver el conflicto del pan definitivamente, en unas breves líneas, aunque bien pudiera excusarme en los documentos que obran ya en el Municipio y que fijan de manera definitiva nuestro criterio sobre tan palpitante problema.

En 31 de marzo de 1921, la minoría socialista, de la cual formo parte, presentó al Ayuntamiento una propuesta de municipalización total del servicio del pan en Madrid. Si esta propuesta se hubiera estudiado y se hubiera demostrado que no era factible realizarla, nosotros, que somos hombres de ideas nuevas y que procuramos atemperarlas a la necesidad, hubiéramos transigido con otra solución que mejorara el problema; pero sin haberse hecho esto, sin habérsenos demostrado que estamos equivocados, es imposible que podamos rectificar nuestro criterio.

Ya sé yo, que por estar la vida municipal encadenada por una legislación anticuada, a la rutina y al capricho del Poder central, hay dificultades legales para llevar a cabo la municipalización, que es necesario que el Gobierno, por conducto del Ministerio de la Gobernación dé las disposiciones que autoricen al Municipio a emprender este camino de la política moderna que se está desarrollando en todos los pueblos del mundo, en donde el progreso industrial ha hecho su obra. El Gobierno no tendrá más remedio que rendirse a la evidencia y ceder, cuando haya una Corporación que le plantee el problema con toda claridad y con decisión.

Nada de lo que pueda afectar a la alimentación, al vestido y a la vida higiénica de los ciudadanos debe ser objeto de especulación particular. Todo lo que se relacione con las necesidades de una vida higiénica y cómoda tiene, aunque no se haya declarado oficialmente, carácter de servicio público. Y cuanto se relacione con ello, ha de estar reglado y sometido a las conveniencias de la colectividad. Y no se nos salga diciendo que esto va contra la libertad de industria, de comercio, etc., esto son monsergas que se esgrimen en defensa de un régimen de inicua explotación del productor y del consumidor.

Frente a nuestro criterio de municipalización total de la industria, hay otras soluciones: la tahona reguladora, la concentración capitalista de la industria y la municipalización subrogada. Ninguna, lo afirmamos rotundamente, resuelve el problema.

La tahona reguladora puesta en las manos del Ayuntamiento, con las pruebas de incompetencia que viene dando, más que elemento regulador del precio del pan, tememos que llegara a ser instrumento que justificara los abusos de los dueños de la industria. La concentración capitalista, no es otra cosa que la asociación de los capitales que vienen actuando fraccionadamente en una sola entidad, bajo una razón social, que se dedicaría como en la actualidad, a sacar la mayor ganancia posible al negocio, para que el dividendo de fin de año fuera lo más lucrativo posible, y la llamada municipalización subrogada, sería la concesión de un monopolio industrial como el de Pompas fúnebres, de efectos perniciosos para el vecindario. ¿No se quedarían con este negocio los propios industriales que hoy explotan la industria?

Se nos dirá, que esta Empresa estaría vigilada e intervenida por la Autoridad y controlada por los obreros, que tendrían una participación en los beneficios. Nosotros, perdónesenos esta sinceridad, no creemos en la eficacia de la intervención de las Autoridades en estos problemas. Nos tienen acostumbrados a que en sus resoluciones se inclinen siempre al lado del fuerte; además, una Autoridad, que no ha sabido hacer cumplir, según las leyes sanitarias, ni aun siquiera esas Ordenanzas, tan anticuadas como la ley, ¿cómo quiere convencernos de la eficacia de su intervención en este pleito?

Pero, además, el capital privado ¿aceptará esa intervención? Creemos, que no. ¡Buenos son nuestros capitalistas! Para ellos es la tan cacareada libertad de nuestra Constitución.

Otra cosa es la intervención en la administración de los obreros. Pero, ¿la aceptará la Empresa que se nombre? Si no la aceptara ¿qué medios hay para obligarla?

Sinceramente creemos que ninguna de estas soluciones son convenientes, y hablar de ellas nos parece que es perder un tiempo hermoso y desplazar el problema dejando su solución.

A la municipalización por nosotros propuesta se hacen dos objeciones: primera, no hay dinero; segunda, ¿cómo se ha de administrar y de regir esta empresa? ¿Han de ser los Concejales en el salón de sesiones quienes administren?

El dinero, no es problema. Si el Ayuntamiento se decide de veras a la municipalización tratándose de una industria de rendimiento seguro, los capitalistas españoles que suelen ser muy comodones, y les gusta más cobrar el cupón que entretener ellos el dinero en iniciativas propias, se lo entregarían. Además de que habría una gran cantidad de gente que no siendo capitalista, si vieran seriedad en el Ayuntamiento para afrontar el problema, depositarían sus ahorros en esta empresa en la seguridad de que no corrían riesgo alguno y realizaban una obra social de importancia. El capital quedaría amortizado en muy pocos años, el intermediario suprimido definitivamente, y la empresa para siempre en manos del vecindario.

La administración había de ser independiente del Municipio, como forzosamente tiene que ser toda empresa municipalizada. Habría su Consejo de Administración, en el que tuvieran representación los obreros, los vecinos, los organismos económicos de la ciudad, el Ayuntamiento, y hasta el capital si se estimaba conveniente, con su Gerente responsable, el que tendría las facultades inherentes a su cargo de tanta transcendencia para las contrataciones, para que pudiera aprovechar los momentos oportunos que el mercado le ofreciera para el mejor éxito de la empresa. No hay obstáculo ninguno; lo que hace falta es voluntad para acometer el problema.

Y no ha de perderse de vista, que para que la empresa tenga éxito ha de abarcarse unido con el problema de la producción del pan, el de la molturación de la harina, que es la base del negocio.

No queremos hablar, de las malas condiciones higiénicas de la industria, de su fraccionamiento, del exceso de despachos de pan, de las condiciones contrarias a la salubridad pública, porque son cosas que ya todo el mundo sabe de memoria y que quedarán resueltas al afrontar el problema como nosotros proponemos. Está ya tan manido todo esto que, reproducirlo aquí nos parecería un poco presuntuoso.

En nuestro proyecto queda municipalizado todo, hasta el llamado pan de lujo. ¡Señores! por el amor que todos los hombres debemos a la verdad ¿hay quien pueda creer que hay una sola clase de pan que se le pueda llamar de lujo? Son variaciones de la producción, costumbres y hasta necesidades de los vecinos que no pueden servir de pretexto para facilitar su explotación.

Pero, además, «el que a hierro mata a hierro muere». ¿No se ha dicho siempre que el exceso de precio de estas clases de pan era para compensar las pérdidas o las escasas ganancias del llamado pan de familia? Pues con los mismos argumentos defendemos nuestro criterio.

Con toda lealtad queda expuesta nuestra opinión, que si se entablara sería discusión y si se aceptara reglamentaríamos fácilmente. Si el Sr. Alcalde guiado de ideas propias, de un sentido político individualista, posponiendo los intereses colectivos a los del sistema de producción capitalista encamina sus pasos a soluciones cuya buena intención no negamos, pero como están fundadas en el error lo advertimos, suya por completo será la responsabilidad.

Tampoco queremos discutir opiniones de algunos señores Vocales de la Comisión, fundadas también en el error, porque las exageraciones se vendrán abajo porque no tienen base en que sostenerse.

Y nada más.

Madrid, 19 de febrero de 1923.

Manuel Cordero.

Las causas fundamentales de la carestía del pan en Madrid, son tres:

La primera consiste en la profusión de tahonas; la segunda la motiva el exceso de despachos de pan; la tercera la carestía de la mano de obra.

Tahonas —Existen 172 con 251 hornos. Casi todas producen una sola clase de pan, y esto es un grave mal, pues cuando las circunstancias aconsejan un cambio de precio, el Ayuntamiento no puede obtener compensación del pan de lujo, pues los fabricantes que elaboran pan de todas clases están en minoría, y es mayoría abrumadora los que elaboran solamente pan de familia.

Puestos de pan y reventa. —Hay más de 1.000 (con 200 sería suficiente), consecuencia que venden una cantidad exigua, de la cual hay que sacar contribución, alquiler (cada día más elevados), luz, quebrantos de venta y vivir una familia.

Otro factor son las elevadas comisiones que se dan de reventa.

En candeal de tasa, cuatro y cinco céntimos en kilo. (Como el tahonero no tiene venta propia, es víctima del revendedor, que es el amo de su producción, y la competencia para no privarse de este medio de dar salida al producto eleva cada día los márgenes de reventa.)

En candeal de flama (ocho piezas en kilo, 80 céntimos el kilo.)

Cada mano (cuatro piezas) cinco céntimos; es decir, que percibe la reventa 10 céntimos en kilo.

En pan francés, percibe la reventa cinco y seis céntimos en mano; en kilo de pan francés, de 13 a 14 céntimos.

En pan de viena, percibe ocho céntimos en mano. (De 20 a 24 céntimos en kilo.)

La mano de obra pesa extraordinariamente. Un obrero de pan candeal elabora hoy 115 kilos y trabaja cuatro horas escasas, cuando puede muy bien, dentro de la jornada de ocho horas, elaborar 200 kilos. Uno de francés elabora hoy 90, y holgadamente puede hacer 105, y uno de viena elabora 60 y puede hacer 75.

Este aspecto social va íntimamente ligado con los anteriores; no hay que pensar en una solución de la cuestión obrera, definitiva, sin la transformación de la industria. En los talleres actuales, faltos de capacidad, de elementos de trabajo, con una producción irrisoria, no es factible una modificación en la mano de obra. Cada elevación de jornales, como pesa sobre una organización industrial muy mala, va directamente a recargar el producto. En una tahona, por ejemplo, que hace 600 kilos y tiene seis o siete obreros, no se puede pensar en buscar ventaja en la mano de obra, porque aunque se quisiera no hay medios hábiles ni de reducir el personal, ni de aumentar fabricación; el obrero en esas condiciones rinde muy poco, pero tampoco se le dan medios de que rinda más. Y toda subida de jornal, no tiene más secuela, para que los términos de la cuestión sigan en pie, que llevarla al precio del producto elaborado.

Desaparecido todo el régimen vicioso de las tahonas, construidas grandes fábricas y talleres, seguramente se podrán elevar los jornales, y sin embargo rendirán más trabajo para la compensación en este aspecto y con la ayuda de los elementos mecánicos de producción.

Soluciones al problema.

Concentración industrial. —La discusión de remedios al problema del pan en Madrid, ha girado alrededor de estos procedimientos: concentración industrial, tahona reguladora, municipalización. Examinaremos las ventajas de estas fórmulas y sus inconvenientes.

Que sin concentración industrial, estableciéndolas sobre bases racionales, no podía fabricarse pan barato, es evidente.

Las 172 tahonas deben reducirse a 10 o 15 grandes fábricas de maquinaria moderna, de instalaciones perfectas, en las que se observen todas las reglas de la economía para producir barato, y las de la higiene en relación con el producto elaborado, y el personal encargado de su elaboración, en las que los 4.500 obreros actuales queden reducidos a los indispensables.

Las autoridades han tratado de provocar esta concentración en distintas ocasiones por estos tres sistemas: por medio de un convenio con el Sindicato de la Panadería; otorgando la preferencia a las grandes fábricas y hasta tener asegurada una fabricación de 22.000 kilos; provocando la constitución de una gran Compañía que se encargara del rescate de la industria actual, del establecimiento de la futura gran fabricación y de su administración y gerencia.

Cualesquiera de estos procedimientos presenta dos formas idénticas. El carácter de monopolio, y el elevado coste inicial de la nueva industria. Por el primer aspecto chocaría con la protesta de gran parte de la opinión, contraria a la idea del monopolio, y la de la *clase obrera*. Por el segundo, limitaría durante muchos años—ya que el capital habría de obtener interés justo—los beneficios económicos que se trata de proporcionar al vecindario.

Concertando la transformación industrial con el Sindicato de la Panadería contumaz rebelde a las disposiciones de la Autoridad, e incumplidor de los compromisos adquiridos, se correría el riesgo de que en posesión del monopolio, no realizara la transformación industrial en el grado necesario.

Por los compromisos sindicales no podría desatender el interés de ninguno de sus socios.

Por su contrato con los obreros, estaría en inferioridad de condiciones para establecer las nuevas condiciones de trabajo: disminución de obreros y aumento de la producción de cada uno.

Convenio con la industria, pero con preferencia a los grandes fabricantes; contra este procedimiento lucharían los obreros y los patronos descartados de la subrogación.

Con mayor virulencia los primeros, pues por intervenir en la dirección del negocio elementos con los cuales no trabajan obreros asociados, temerían, en justicia, obtener beneficios inferiores a los que lograrían seguramente del Sindicato de la Panadería. Los patronos descartados, que serían la mayoría, iniciarían una campaña violentísima contra esta forma de monopolio.

Desde el punto de vista económico, las ventajas no serían mayores, pues no hay posibilidad de separar de una solución de *totalidad* la indemnización a los que hoy intervienen en la industria, a todos.

Constitución de una nueva empresa.—De lo expuesto se deducen, a nuestro juicio, los inconvenientes del sistema, contrario al interés público, en su aspecto de monopolio-privado; transformación carísima que disminuiría los beneficios al consumidor.

Estos procedimientos, serían motivo de luchas obreras frecuentes y violentas.

Tahona reguladora municipal.

A nuestro juicio, la precaria situación de la Hacienda municipal, hace imposible que sea el Ayuntamiento, quien por sí, resuelva el problema.

En sus leyes, carece, además, de autorizaciones, sanciones, etc., que puedan someter a su autoridad a los que se propongan no obedecer sus inspiraciones y acuerdos, en lo que no está previsto en la ley Municipal.

Ha de partir la solución del Gobierno. En el doble aspecto legal y económico.

El Ayuntamiento no tiene recursos para establecer una tahona reguladora.

Pero si el Gobierno anticipara la cantidad necesaria, chocaría en su funcionamiento, en la angustia de los procedimientos que la ley otorga a las Corporaciones administrativas, que no pueden ser aplicados a la gerencia de una empresa industrial. La ley de Contabilidad por un lado; el absurdo de

que los Ayuntamientos sean Cámaras legislativas y gobernantes; la ausencia efectiva de responsabilidad de sus miembros; la condición de los elegidos investidos, sí, de la confianza de sus electores, pero sin la competencia debida, son motivos que nos hacen desconfiar de la acción municipal, aplicada a la administración de una empresa industrial.

El Sindicato de la Panadería, además, lucharía con ventajas contra la acción reguladora de la tahona municipal.

Y el Ayuntamiento carecería de facultades para imponer al gremio la transformación industrial de la fabricación privada.

Sin pensar en la posibilidad de tolerancias punibles, de contubernios inconfesables, creemos que esta solución es inadecuada.

Municipalización total.

Teóricamente es la solución que más nos satisface. Por lecturas y por estudios directos, conocemos algunas municipalizaciones de los servicios públicos, la fabricación del pan debe ser considerada como tal, como abastecimiento de agua, luz, tranvía, pompas fúnebres, anuncios, pan, etc.

Mucho de lo dicho al hablar de la tahona reguladora, puede ser aplicado a la municipalización. En nuestro régimen municipal, creemos posible la municipalización de algunos servicios públicos. En Madrid creemos que, desde luego, sería posible las Pompas fúnebres, por ejemplo.

Pero para otros servicios más importantes y complejos como el del pan, estimamos que debe ser previa la reforma del régimen municipal español. El Municipio con hacienda propia, con autonomía, separando en su funcionamiento lo que por ser técnico debe encomendarse a la competencia de la función fiscalizadora que incumbe a los representantes populares investidos de la confianza de sus electores; con gobierno y técnicos responsables ante la Cámara de representantes del vecindario, es posible y debe ser inexcusable, la administración y gerencia de los servicios públicos de la ciudad.

La municipalización del pan es empresa cara. El Sr. Cordero, en estudio presentado, calcula los gastos de instalación de fábrica de harinas y fábrica de pan en trece millones de pesetas.

Según estudio del Sr. Marqués de Morella, persona competente, y que representa a fábricas extranjeras constructoras de maquinaria para molinería y fabricación de pan, serían necesarios diez y siete millones de pesetas, además de los solares.

A esta cantidad debe unirse el importe de las indemnizaciones a los que actualmente viven de ella. En números redondos calculamos el coste de la municipalización en *veinticinco millones de pesetas*.

Si el Estado se decidiera por anticipar esta cantidad al Ayuntamiento, debería entregar con ella un procedimiento reglado, para su funcionamiento, que se separara de las leyes vigentes y separase la empresa de la influencia municipal.

Pero por el coste de la municipalización y por las dificultades que emanan del régimen municipal vigente, descartamos también esta solución.

¿Cuál queda? A nuestro juicio, la que sigue:

Fábricas de harinas y de pan autónomas.

Nuestra solución es modesta. Una fábrica de harinas y otra de pan, que pueda elaborar diariamente de treinta a sesenta mil kilos de pan.

Calculamos su coste en unos cuatro millones de pesetas.

Se crearía un organismo especial autónomo, parecido al Canal de Isabel II.

El capital se formaría con una aportación municipal—que anticiparía el Gobierno—, equivalente a la cuarta o la quinta parte. El resto por aportaciones de entidades, como las Cámaras de Comercio,

Industria, Agricultura, Propiedad, Círculos, Asociaciones, etc. y particulares. Las entidades citadas estarían representadas en el Consejo, así como los particulares.

El Ayuntamiento tendría en determinados momentos huelgas, conflictos de orden público, derecho a asumir la dirección de las fábricas, pero con autorización de la Superioridad, a la que podría apelar el Consejo si estimara inadecuada la medida municipal.

Se garantizaría al capital privado un 5 por 100, y si los beneficios pasaran de esta cantidad, sin pasar del 8 por 100, se repartirían por igual entre los trabajadores y el Municipio.

Lo que excediera de este interés se aplicaría por igual al capital aportado.

El gobierno se reserva la intervención, por medio del Gobernador civil, en las tareas del Consejo de Administración y la facultad de dejar sin efecto las decisiones que considerase atentatorias al interés público.

El Ayuntamiento habría de dedicar todos los beneficios a liquidar con el Estado el anticipo recibido.

Todas las cuestiones sociales que surgieran habrían de resolverse por un tribunal mixto de obreros y delegados del Consejo, siendo árbitro el Gobernador civil.

Medidas accesorias.

La fábrica en función, con todos los adelantos de la industria, podría llegar a la fórmula de kilo de harina, kilo de pan.

Pero no se lograría nada si no se obligaba a la industria privada a transformarse en gran industria.

Para ello, se adoptarían las siguientes medidas:

Primero. En un plazo de dos años caducarán todas las licencias de fábricas que no sean susceptibles de elaborar 10.000 kilos de pan.

Transcurrido el primer año se clausurarían, sin derecho a indemnización, las de condiciones de salubridad e higiene más lamentable y las de menos producción, en número aproximado a la mitad de las existentes.

Transcurrido el segundo, alcanzaría la clausura a las demás.

Segundo. No se autorizará la apertura de fábricas nuevas, sin estas condiciones:

- a) Respecto a las reglas de la higiene para el producto elaborado y para los obreros.
- b) Maquinaria moderna que permita la fabricación con el menor coste.
- c) Fabricación mínima de 10.000 kilos.
- d) Elaboración de las tres clases de pan.

Tercero. No se autorizarán nuevos despachos, y en el plazo de dos años se llegará a la reducción de los existentes hasta el número de 20 por distrito.

Cuarto. El servicio a domicilio tendrá un sobreprecio de cuatro céntimos en kilo, y se obligará a que el pan salga de las tahonas envuelto en papel de seda.

Quinto. Se revisará el margen de molturación de harinas, hoy excesivo.

Sexto. Igualmente se revisará el margen concedido a los tahoneros.

En el período de transición de la actual industria a la gran industria, resolverá cuantas incidencias surjan una Comisión, compuesta por las personalidades siguientes: Gobernador civil, Alcalde, un Concejil, un técnico designado por Fomento, otro por el Ayuntamiento, representantes de las Cámaras oficiales y Asociación de Vecinos, Casa del Pueblo, Sindicato de la Panadería, fabricantes de harinas, Sindicato de Artes blancas.

Conveniencia de asociar al Ayuntamiento a la empresa.

No consideramos conveniente ni justo separar al Ayuntamiento de esta empresa. En primer término porque por ley, tiene facultades que no pueden desconocerse. Luego, porque el Municipio merece que por el Estado se le autorice para que en los conflictos de la ciudad tengan una intervención directa, y vaya capacitándose en la resolución de todos sus problemas.

De aliado el Ayuntamiento, puede prestar colaboraciones inestimables, contra su autoridad, sus facultades y sus prestigios, se le enojaría sin beneficio para nadie.

Madrid, 16 de febrero de 1923.

A. López Baeza.

Mi opinión sobre el problema de la fabricación del pan en Madrid, la expuse con entera claridad en el documento que suscribieron en enero de 1920 los Delegados de las Sociedades de Obreros panaderos al acudir a la información abierta por la Comisión nombrada por el Ministro de Abastecimientos en diciembre de 1919, para estudiar el referido problema. Aquel escrito lo redacté yo y reflejaba mi sentir. Figura en el folleto que editó el Ayuntamiento con los informes de las entidades y particulares que tomaron parte en la encuesta (páginas 59 a 65).

Los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha citada, no han modificado mi criterio. Antes al contrario, han ratificado mis opiniones en favor de la municipalización de la elaboración y distribución del pan.

Creo, por consiguiente, que la solución de este problema del pan radica en la municipalización. Es la única solución que permitirá abarcar el asunto totalmente y resolverlo en sus diversos aspectos. Las demás soluciones que se apuntan, dejan en pie dificultades de importancia y alguna hasta suscitaría nuevos conflictos.

Como dije en el aludido escrito de 1920, la municipalización no implicaría que la industria fuera a ser administrada por el Ayuntamiento exclusivamente y por los procedimientos habituales en los servicios municipales que al presente dependen del Concejo. Se aplicaría el sistema que hace años—bastantes años—se practica en los Municipios de las ciudades inglesas, alemanas y belgas y de los demás países en casos semejantes; el que practica el Estado alemán y el suizo en la explotación de sus ferrocarriles. Este sistema consiste en separar la administración del servicio municipalizado de la administración general de la Corporación, la cual se reserva las facultades de fiscalización e inspección, y en poner al frente del servicio para que lo dirija y administre un Consejo, integrado por técnicos, obreros, consumidores y representantes del Ayuntamiento. Es decir, se asimila la administración y funcionamiento del servicio municipalizado a la de una gran sociedad anónima, con la diferencia fundamental de que, en tanto en la sociedad anónima el móvil de sus Directores es el de proporcionar fuertes dividendos a los accionistas, en el servicio municipalizado el interés está en atender las conveniencias públicas y cumplir un alto fin social: el de hacer la vida más grata y fácil a los ciudadanos.

Huelgan, por lo tanto, cuantas objeciones se formulan a la municipalización a base de las deficiencias reales o ficticias de la administración del Concejo madrileño.

Para municipalizar la fabricación del pan, hay que establecer o adquirir una fábrica de harinas. El pan municipalizado exige la eliminación del harinero, que es un factor de encarecimiento y de desorganización industrial.

La adopción de este sistema obligaría a proceder previamente a indemnizar a los obreros, reparadores e industriales que al presente viven de la industria. Este aspecto de la cuestión había que amoldarlo a la aplicación de un sistema racional de amortizaciones, del personal sobrante, por lo menos, durante el período de transformación del utillaje de la industria, pues no creo que sería posible ni discreto, hacer desde luego, tabla rasa de los actuales elementos de fabricación.

Hay que confesar que la municipalización impone desembolsos de consideración que no puede hacer el Ayuntamiento. La municipalización ha de implantarse con el concurso del Estado, el cual ha de anticipar los fondos necesarios para acometer el problema. Ello haría que en el Consejo Director del servicio tuviera que figurar una representación del Estado. Ahora bien, en el referido Consejo habrían de estar en mayoría los elementos extraños a los organismos oficiales, pues si no se correría el riesgo de que la administración de la industria se convirtiera en una dependencia más del Estado o del Ayuntamiento.

Queda una cuestión: la de la cantidad que habría que gastar en plantear la municipalización. Si estas líneas tuvieran la pretensión de ser un estudio acabado del problema, daría una cifra y la justificaría; pero se trata simplemente de un esbozo de proyecto, de un ligero apuntamiento, y estimo impertinente entrar en esos detalles. Lo único que afirmo es, que para municipalizar la fabricación y distribución del pan en Madrid, seguramente haría falta menos dinero del que se invierte en Marruecos en una semana de guerra.

* * *

En el índice de soluciones que se presentan para resolver este magno problema del pan, figura la de establecer una fábrica de pan con su correspondiente fábrica de harinas. No creo que ésta sea la solución. Sin embargo, si no prevaleciera el criterio de municipalización, yo me acogería al de la fábrica reguladora, si se hacía en determinadas condiciones.

En éste, como en otros problemas municipales, opino que es preferible una solución regular y hasta mediana, a que no haya ninguna solución.

Las condiciones a que aludo son:

Que la administración de la fábrica reguladora habría de efectuarse de la manera antes indicada para la industria municipalizada.

Que habría de hacerse un contrato de trabajo con la organización obrera sobre la base de que el Ayuntamiento garantizase a los operarios condiciones de vida humanas, y de que los obreros de la fábrica reguladora estarían completamente fuera de las combinaciones que pudieran hacer los fabricantes para perturbar la fábrica municipal.

Que, a la par que montaba la fábrica municipal, el Ayuntamiento emprendería una política enderezada a estimular—mejor, a obligar—a la industria privada de la panadería a concentrarse y modernizarse. (Como precedente—nada más que como precedente—, podrían tomarse las disposiciones del ex Alcalde Sr. Sánchez de Toca, del año 1917.)

* * *

De lo dicho se infiere que estimo equivocada toda solución que se inspire en el criterio de entregar el monopolio del abastecimiento de pan de Madrid a una Empresa privada, aunque la entrega se realice con el nombre de municipalización subrogada.

Además, tengo el convencimiento de que si el Gobierno la acordara, no se llevaría a la práctica, porque se alzarían contra el proyecto el vecindario, las Sociedades obreras y los patronos panaderos (éstos total o parcialmente, según se contara o no con ellos para la formación de la Empresa monopolizadora). Con sinceridad, creo que cuanto tiempo se invierta en hablar de proyectos inspirados en ese criterio, es tiempo perdido. Por ese camino no se va a ningún sitio bueno. Si acaso se llegará al escándalo.

Por otra parte, el momento para hablar de soluciones de esta clase, es inoportuno. Este procedimiento puede quizás halagar a cierto sector patronal de la panadería. A los obreros tiene forzosamente que disgustarles. ¿Es oportuno apuntar una solución que seguramente ha de molestarles, en el instante preciso en que, gracias a ellos, se está riñendo, con casi la seguridad de éxito, una campaña contra los patronos para forzarles a abaratar el pan? Dejo la respuesta al buen juicio de los que lean estas líneas.

Madrid, 19 de febrero de 1923.

Mariano García Cortés.

Informes aportados al Ayuntamiento por verdaderas capacidades, hallan las siguientes causas que en Madrid obligan a vender el pan a precios excesivamente superiores al de la harina:

1.^a El estado rudimentario de la industria de la fabricación del pan, desarrollada en talleres inadecuados, de producción escasísima y gravada por excesivos gastos generales, que no permiten elaborar en condiciones económicas.

2.^a La constante confabulación de los patronos, preocupados exclusivamente y en demasía de la obtención de beneficios usurarios y de retrasar la modernización de los medios industriales.

3.^a El excesivo número de obreros dedicados a fabricar pan, que unas veces de acuerdo con los fabricantes y otras en oposición, lograron contratos especiales de trabajo que encarecen la producción.

4.^a El régimen de tasas establecidas para las harinas, y los pactos punibles concertados por los fabricantes para obtener utilidades desproporcionadas, en este artículo de primera necesidad; y

5.^a El reparto o reventa que, exclusivamente multiplicado, va creando intereses de clase que recargan el precio del pan en un tanto por ciento considerable.

Para aminorar las posibilidades de conflictos en el porvenir, para que el pan pueda venderse a precios justos en relación con el trigo, sólo halla el Concejal que suscribe, una terapéutica aconsejable: la rápida concentración y modernización de la industria, simultaneada con el castigo de las extralimitaciones a que patronos y obreros se entreguen en el ejercicio de sus derechos atendiéndolos con evidente y grave perjuicio de la comunidad.

La idea cardinal apuntada puede, acaso, desarrollarse en las siguientes:

B A S E S

1.^a Se solicitarán del Estado las definiciones legales, y los medios económicos necesarios para conseguir:

a) La municipalización de la fabricación y venta del pan en el término municipal de Madrid; la expropiación de las actuales tahonas, y la declaración de que aquellas entidades industriales y mercantiles constituyen un servicio público.

b) Recursos económicos que garanticen un interés legítimo a los capitales privados que se agrupen para constituir la Sociedad que después se hace referencia, y que sirvan para pagar el precio de las indemnizaciones debidas a los actuales fabricantes de pan.

Ambas cooperaciones pueden prestarse por el Estado con arreglo a la ley de Protección a las Industrias.

Organización de la Sociedad explotadora.

2.^a Lograda la declaración de servicio público para la fabricación del pan y venta en Madrid, el Ayuntamiento contratará con una sociedad anónima la exclusiva producción y venta de este artículo, en la cantidad que reclame el total de abastecimiento del término municipal de Madrid. Esta concesión será hecha por un período de veinte años.

3.^a Para constituir la sociedad anónima expresada, se invitará a los Bancos, Grupos financieros e industriales, y a las Sociedades o particulares que actualmente se dedican a la molturación de harinas o fabricación de pan, que con una fianza de un millón de pesetas se comprometan a reunir un capital no inferior a diez millones de pesetas completamente desembolsado.

4.^a Las propuestas de los concursantes, contendrán los extremos que a continuación se expresan:

a) Conformidad con las presentes bases.

b) Oferta de capital, cuantía y garantías.

c) Proyecto de Estatutos.

d) Obligación de aportar los elementos indispensables para abastecer Madrid del pan que reclame el consumo, y de transformar la industria en un plazo que se señalará en el pliego; de instalar una o varias fábricas de harinas, capaces para molturar 250.000 kilogramos por día; de crear las fábricas de pan convenientes para el abastecimiento de la ciudad, dotándolas de los modernos adelantos industriales, en condiciones inmejorables de higiene, y con una producción no inferior a 50.000 kilogramos diarios por fábrica; de establecer un mínimo de 100 despachos, distribuidos por barrios y capaces para recibir y guardar 2.000 kilogramos de pan.

e) Tanto por ciento de aumento sobre el precio del trigo en mercado a que se comprometen a vender el pan.

f) Plazo en que se obligan a empezar el funcionamiento; y

g) Justificante de haber presentado la fianza exigida.

5.^a Firmado el contrato, la Sociedad adjudicataria se encargará de producir el pan necesario para el consumo, y mientras construye las fábricas exigidas en la base anterior podrá utilizar las actuales mediante expropiación o arriendo.

6.^a A la Sociedad adjudicataria se le garantizará por el Estado un interés al capital, no inferior al 5 por 100.

7.^a Tendrán preferencia para suscribir acciones hasta el 33 por 100 del capital y en todo caso, por el total de la indemnización que le corresponda percibir por su aportación industrial, los actuales fabricantes de pan de esta Corte.

8.^a El precio que se señale al pan se entenderá fijado para el pan puesto en los despachos o las fábricas. La comisión a los repartidores domiciliarios u otra clase de revendedores, la satisfarán los consumidores.

Administración.

La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Consejo de Administración, un Concejal Delegado del Ayuntamiento y un Director Gerente.

10. El Concejal Delegado del Ayuntamiento, será nombrado por la Junta municipal de Asociados. Presidirá el Consejo de Administración y las Juntas de accionistas.

11. El Director Gerente, será nombrado por el Consejo de Administración; tendrá voz y voto en la Junta general y las facultades que le concedan los Estatutos.

12. El Consejo de Administración, además del Concejal Delegado, se compondrá de seis Consejeros nombrados por la Junta de accionistas; un representante de la Cámara oficial de la Industria, otro de la de Comercio, y otro de los obreros panaderos que presten servicios en la Empresa.

13. Las atribuciones y representación del Consejo les serán señaladas en los Estatutos.

Reparto de beneficios.

14. Repartidas las acciones, un 6 por 100 libre de impuesto se destinará el 10 por 100 del remanente, a un fondo de reserva sociales. El resto se distribuirá en tres partes iguales, destinadas: una como

participación de beneficios a los obreros de la Sociedad; otra a dividir por igual entre los Consejeros y el Director Gerente; y la tercera, como aumento de dividendo a los accionistas.

15. No podrán pertenecer al Consejo ni ocupar cargos en la Sociedad, con la sola excepción del Concejal Delegado, el Alcalde, los Concejales, los Vocales Asociados y los empleados municipales o sus parientes hasta el cuarto grado, mientras dure su mandato o presten servicio en el Ayuntamiento.

16. Si durante el período de concesión, el Estado o el Ayuntamiento acordaran municipalizar la industria por gestión directa la Sociedad adjudicataria vendrá obligada a ceder los elementos industriales que posea, previa indemnización del valor tasado y de un 10 por 100 como precio de opción.

17. La Sociedad adjudicataria disfrutará la exención de toda clase de impuestos municipales, creados y por crear; del pago de licencia de construcción a las nuevas fábricas, reforma de las actuales, y apertura de despachos.

18. El Ayuntamiento solicitará del Estado la excepción de la contribución industrial y de comercio. Madrid, 19 de febrero de 1923.

A. Regúlez.

Cumpliendo las indicaciones de la Alcaldía Presidencia, el que suscribe ha de indicar muy someramente su opinión respecto al cuestionario formulado, sin que tenga grandes esperanzas en el resultado definitivo del problema planteado, pues esta es la fecha que nada práctico se ha hecho en esta cuestión, no obstante el tiempo transcurrido.

Sin embargo, como no quiero que se pueda decir que rehuyo intervenir cuando se dice se trata de resolver este asunto, formulo mi opinión en la forma siguiente:

1.º *Reparto a domicilio*.—Con relación a este punto concreto, ya consta mi manera de pensar en la ponencia presentada al Ayuntamiento y que ratifico en todos sus extremos. A mi juicio, el pan, repartido a domicilio, debe expendirse con un sobreprecio del que se venda en los despachos, y a los repartidores se les debe facilitar la cantidad de pan que necesiten al mismo precio que al público que lo adquiera en la tahona, y de este modo no tendrá que exigir la desigualdad irritante de que el público que se molesta en adquirir el género en el establecimiento lo mismo que los repartidores, éstos tengan una bonificación en el precio que aquél no obtiene.

2.º *Precio de las harinas*.—El margen de 11 pesetas concedido a los fabricantes, a mi juicio, es exageradísimo, y es necesario modificar el mismo, derogándose las disposiciones que lo autorizaron y conceder lo que prudencialmente debe otorgarse.

3.º *Trigo y pan*.—El precio a que se debe vender el pan debe de ser el mismo que el de la harina, según hago constar en la ponencia que la Comisión debe conocer; desapareciendo, desde luego, los 10 céntimos en kilogramo que caprichosamente se le ha otorgado al fabricante.

Está demostrado que con una fabricación regularmente organizada se pueden producir 131 kilogramos de pan con 100 de harina, y con esta diferencia se cubren con exceso todos los gastos y se obtiene un beneficio industrial. Si la fabricación actual es deficiente, culpa será del industrial que por sus deficiencias no puede producir en condiciones de competir con los que tengan perfeccionada su fabricación, y debe desistir de su negocio. Lo que no puede tolerarse es que el público pague culpas, deficiencias o carencia de medio de los industriales.

El Ayuntamiento cumpliría un deber si hiciera una revisión de las fábricas, y las que no estuvieran en condiciones debieran caducar su licencia. Se puede conceder un plazo de tres meses para la reforma; transcurrido éste sin haberse realizado, resolver en la forma indicada.

Con este particular está íntimamente relacionada la mano de obra. Respecto a este extremo, reproduzco lo consignado en mi ponencia. Debe abaratare la producción, obligando al obrero a que produzca lo que pueda dentro de la jornada legal, siempre que el local reúna las condiciones necesarias de higiene y salubridad, y de este modo el patrono podrá conseguir obtener una economía, que podrá redundar en beneficio del público.

4.º *Tahonas pequeñas*.—El ideal sería que cada tahona fabricase un número mínimo de 5.000 kilos; pero el Ayuntamiento no puede lanzarse a clausurar las de pequeña producción por este solo motivo. Esto llevaría consigo indemnizaciones que ni puede ni debe pagar el pueblo de Madrid.

Refórmese la industria; higienícense los locales; destrúyase la confabulación actual, y entonces el pequeño fabricante no podrá competir con los de mayor producción y tendrán que ampliar su fabricación o cesar en ella.

Mientras exista el convenio que actualmente tiene el gremio, nada se conseguirá cerrando las fábricas pequeñas, porque todos venden a un mismo precio, lo mismo el que produce 10.000 kilos que el que produce 500, y aun suponiendo que desaparecieran estos últimos, continuarían vendiendo al mismo precio.

5.º *Tahona reguladora y fábrica de harinas.*—Esto es lo que pudiera influir en la solución de este complejo asunto; pero su implantación será funesta para los intereses del pueblo de Madrid. No resolverá nada y costará mucho dinero, en primer lugar por no saber administrar, porque será una dependencia a la que se lleve un personal burocrático innecesario y los que trabajen lo harán mal, y en segundo término por la serie de trámites que la ley impone, y el Ayuntamiento no podrá comprar o vender aprovechándose de las fluctuaciones del mercado y épocas más favorables para hacerlo, por ejemplo, en la época de recolección, en la de escasa demanda, en aquellas otras por lluvias, fríos o demás accidentes climatológicos; el industrial celoso de su negocio aprovecha todas estas circunstancias y siempre está vigilando, y el Ayuntamiento, para comprar o vender, tendrá necesidad de instruir expedientes, y cuando se resuelvan habrán pasado las circunstancias que influían en el mercado, y comprará malo y caro.

Por esta razón, como solución intermedia he propuesto la municipalización de la venta, sin perjuicio de que en su día se proceda a la municipalización total.

6.º *Auxilios necesarios.*—Para la instalación de la fábrica de harinas y tahona reguladora debe el Estado conceder al Ayuntamiento *una subvención*, no anticipo reintegrable, porque el Municipio no puede atender con sus recursos a las necesidades de esta empresa.

Expuesto muy brevemente mi criterio, la Comisión y el Ayuntamiento resolverán, como siempre, lo más acertado.

Madrid, 9 de febrero de 1923.

Emilio Noguera.

Al Excmo. Ayuntamiento:

Lo complejo del problema de la producción y venta del pan en Madrid, demuéstralo la disparidad de opiniones de cuantos tratan de su resolución.

Conviene en varios detalles de relativa importancia; pero en cuanto se acercan a lo fundamental, la discrepancia es manifiesta.

Conformes todos en que existe un estado patológico que exige el inmediato empleo de remedios de intensidad considerable. No se puede perpetuar la situación de cosas creada por la inactividad, indiferencia o falta de decisión con que se ha dejado pasar el tiempo sin la adopción de indispensables resoluciones.

Pero el conflicto surgido por el Sindicato de la Industria panadera y su intransigencia y rebeldía a las órdenes de la Autoridad, no puede quedar reducido, como otras tantas veces, a un simulacro; hay que ir resueltamente a una finalidad que garantice el absoluto ejercicio de la función tutelar que corresponde a los Poderes gubernativo y municipal, de asegurar el diario abastecimiento de pan, su fabricación en perfectas condiciones higiénicas, su precio justo, su calidad excelente y su peso exacto.

Conformes asimismo en que el número de tahonas con una escasa producción, es un factor de notorio gravamen del precio del pan. De las 171 tahonas, pertenecientes al Sindicato, la de mayor producción, es de 4.100 kilos, y casi todas las demás, de 550 y 1.100 kilos. De acuerdo todos en que no debe consentirse la continuación de este número de tahonas sometidas a la autoridad de un Sindicato, que aparentando otros objetivos legales, su principal finalidad es la de limitar la fabricación en cada horno y la de mantener el precio mínimo del pan, ante la necesidad de cargar sobre un exiguo producido, todos los gastos materiales y personales de esos establecimientos.

Conformes igualmente en que constituye otro motivo de encarecimiento el número excesivo de puestos de pan, que, según informes, pasan de 3.000 y que exigiendo el empleo de crecido capital para pago de alquileres, personal, contribución e impuestos, naturalmente ha de repercutir sobre el precio del artículo.

Conformes también en que es otra causa de gravamen el reparto a domicilio, pues verificándose el mayor abastecimiento en esa forma, el fabricante se ve obligado a abonar una comisión de tres, seis o más céntimos, con perjuicio del que lo adquiere en la tahona; es decir, que la comodidad de parte del vecindario, constituye una carga para el resto de la población.

Conformes asimismo en que la mayoría de las tahonas son antiquísimas, faltas de todo medio moderno de producción, contribuyendo también a gravar el artículo, y que carecen—y esto es lo más grave y de continuación imposible, una vez evidenciado—de elementos de higiene, tanto para el obrero que trabaja en crueles condiciones, como para el consumidor, expuesto a diario a contraer inexplicables enfermedades, desde el momento que el pan se fabrica con agua de pozo, al lado de retretes sin agua y de inenarrables suciedades que producen asco e indignación.

Conformes igualmente en que el Ayuntamiento carece de facultades y normas legales para intensificar una intervención que le permita adoptar todas aquellas medidas y resoluciones que tratándose de un servicio municipal le corresponderían por su ley Orgánica; y que asimismo le falta una hacienda que le consienta el empleo de recursos bastantes e imprescindibles para acometer de una vez la manera y forma en que debe reglamentarse la industria de fabricación y venta del pan para seguridad y beneficio del vecindario.

Conformes asimismo en que para obtener un precio justo del pan en relación con el precio de los trigos, se impone la tasa de las harinas, estableciendo un límite a la molturación, que ya actualmente disfruta de un margen verdaderamente excesivo, sin beneficio del agricultor y con evidente perjuicio del consumidor.

Y conformes igualmente, por último, en que deben revisarse las tarifas ferroviarias de transporte de trigos y harinas, que permiten la anomalía de que una tonelada de trigo de Valladolid a Barcelona, con recorrido de 735 kilómetros, pague menos que de Valladolid a Madrid, con un recorrido de 242; y que un vagón de harinas de Zaragoza o de cualquier otro punto a Madrid, pague igual que uno de trigo, siendo así que el vagón de trigo solo contiene tres cuartas partes de harina, y que un quintal métrico de Zaragoza a Madrid, pague menos que el quintal métrico de trigo, con perjuicio evidente de la fabricación madrileña a la que se le encarece su producción harinera.

Pero en lo que la conformidad desaparece y la diversidad de criterios se puntualiza, es cuando se trata de la organización total de la industria y fabricación del pan en Madrid; en este punto se propugna por la municipalización total, por la municipalización subrogada, por la concentración capitalista de la industria, por la tahona reguladora y por la municipalización de la venta; notándose la particularidad, de que de nuevo aparece la conformidad en cuanto a la conveniencia de que un organismo creado al margen de la Corporación municipal, sea el que dirija y administre la industria municipalizada.

A juicio de la Alcaldía, resulta bien claro el camino a seguir, una vez conocidas las opiniones de los señores Concejales, que en su día recibieron el encargo del Excmo Ayuntamiento de estudiar y proponer el plan de reorganización total de la industria panadera. Todo estriba en hacer conciliables esos, al parecer, opuestos criterios y encontrar la fórmula exacta y precisa que los sume. Y esto se consigue remitiéndose a dos etapas que no es necesario se sucedan y que pueden ir, por el contrario, paralelamente, hasta la resolución del problema.

De momento, y para poner término definitivo al conflicto planteado por la injustificada intransigencia de los fabricantes de pan a expender éste a 65 céntimos el kilo, se impone una solución transitoria, provisional, interin se realiza el plan de reorganización total, con sujeción a los acuerdos que adopte el Excmo. Ayuntamiento, aprobados por el Gobierno, llamado a intervenir en un asunto que tanto afecta al orden público y al mejoramiento del precio de las subsistencias.

La Alcaldía, después de meditar detenidamente acerca del asunto, tiene el honor de proponer a la Excmá. Corporación, de cuya Presidencia se honra, los siguientes acuerdos:

Primero. Que se solicite del Gobierno de S. M. la declaración de servicio público para el abastecimiento y venta del pan en Madrid, de cuya declaración deberá derivarse:

a) La obligación ineludible, por parte de patronos y de obreros, de someter sus diferencias a un tribunal arbitral o Consejo de conciliación, compuesto por mitad de patronos y obreros, presidido por el Gobernador de la provincia.

b) La facultad de incautarse la autoridad gubernativa, total o parcialmente, de las fábricas de pan, caso de cesación de la industria, y de elaborar el artículo a costa de los fabricantes, si éstos hubieran sido los causantes de la cesación de aquélla.

c) El establecimiento por parte del Poder público, de normas legales, a las que deberán ajustarse las autoridades gubernativas y municipales, en sus esferas respectivas o de común acuerdo, para intensificar una intervención eficaz que les permita adoptar todas aquellas medidas y resoluciones encaminadas a la inspección y vigilancia de las tahonas y de su perfecto funcionamiento, calidad de su producción y exacto peso de ésta; puntualizando sanciones que aseguren el cabal cumplimiento de los acuerdos de fijación de precio y manipulación del pan.

d) La determinación de la cifra de tahonas y puestos de venta que podrán autorizarse por el Ayuntamiento en relación con el número de habitantes, sus condiciones y mínimo de producción que deben de rendir aquéllas.

e) El margen que ha de existir por razón de molturación entre el precio del trigo y la harina y sanciones a la inobservancia de esa tasa.

f) Y la revisión de las tarifas ferroviarias, para lo que está autorizado el Gobierno cada cinco años, por el pliego de condiciones generales de la concesión de ferrocarriles y por las leyes vigentes, a fin de que se abarate el transporte de los trigos destinados a la molturación en las fábricas de Madrid y de las harinas que se consignen al consumo de este vecindario.

Segundo. La reglamentación del reparto a domicilio, de modo que la comisión del revendedor no se compute nunca para determinar el precio del pan y sea de exclusiva cuenta del consumidor que lo adquiera a domicilio, con sujeción a una tarifa máxima y mediante abonos semanales o mensuales, según convengan el consumidor y el vendedor.

Tercero. La inspección facultativa de todas las tahonas para determinar con precisión las que no reúnan condiciones higiénicas y sean bajo este punto de vista un peligro para la salud del vecindario y de los obreros y dar conocimiento al Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, de los dictámenes emitidos por los técnicos a fin de que adopte las medidas y soluciones que le correspondan, con arreglo a la ley Provincial.

Cuarto. La fijación de un plazo improrrogable de seis meses para sanear y reformar aquellas tahonas que según dictamen facultativo o determinación de la autoridad gubernativa, sean susceptibles de saneamiento y de reforma, siempre que afiancen una producción por lo menos de 10.000 kilos.

Quinto. La inmediata clausura de todos los puestos de pan que no reúnan condiciones higiénicas y no se ajusten a las prescripciones de las Ordenanzas municipales.

Sexto. Se construirán por el Ayuntamiento cuatro fábricas de pan situadas en lugares estratégicos para facilitar la distribución del artículo; dotadas de todos los adelantos modernos y capaces de una producción mínima cada una de 40.000 kilos diarios, y una fábrica de harinas bastante a producir por lo menos 125.000 kilos diarios, con el complemento de los silos o depósitos necesarios de cemento armado para almacenaje del trigo que pueda molturarse durante veinte a treinta días, a fin de hacer frente a cualquiera dificultad en los transportes ferroviarios. Para realizar dichas construcciones y ponerlas en condiciones de funcionamiento puede suponerse precisa la cantidad de 5.000.000 de pesetas, calculada a la vista de la moción presentada por la Alcaldía al Excmo. Ayuntamiento el 22 de octubre de 1915, y en la que, para la construcción de una fábrica de harinas y dos de pan, se presupuso por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Bernardo de Granda, una verdadera autoridad, la suma de 2.173.000 pesetas, comprendidos solares, maquinaria y accesorios. La Corporación municipal, procederá por sus técnicos a la formación de los proyectos oportunos y sacará a subasta la construcción de los edificios y maquinaria en el más breve plazo posible.

Séptimo. Una vez construídas las fábricas, se constituirá por escritura pública, según dispone el Código de Comercio, una sociedad anónima por acciones para la explotación de las fábricas y venta de pan, bajo la dirección de un Consejo de Administración, presidido por el Alcalde o Concejál en quien delegue, compuesto de accionistas y obreros y de representantes de las Cámaras de Comercio, Agrícola e Industria. Unos estatutos formados por el Ayuntamiento, regirán provisionalmente hasta que el Consejo de Administración, una vez constituído, haga la propuesta de ratificación o de aprobación definitiva y con sujeción a lo que se disponga en los estatutos y reglamento de régimen interior aprobado por el Consejo de Administración, se gobernará la explotación y distribución del artículo. La caja y la contabilidad funcionarán con absoluta independencia de las del Ayuntamiento; al que solo estará obligado el Consejo a comunicarle anualmente la cuenta de ingresos y gastos y el abono a la Caja municipal del 5 por 100 de interés del capital invertido por el Ayuntamiento en la construcción de las fábricas, más el sobrante de los beneficios líquidos después del pago del dividendo a los accionistas, de las dietas señaladas por los estatutos al Consejo de Administración y del 2 por 100 a los obreros de las fábricas que disfrutarán un jornal con arreglo a plantilla y no podrán ser separados sin causa justa demostrada en expediente en el que habrán de ser oídos.

Octavo. Las Sociedades fabricantes de pan, con tahonas modernas y dotadas de condiciones higiénicas, con una producción en sus distintas fábricas superior a 80.000 kilos diarios, deberán concentrar la industria, bien mediante compra o convenio con otras de producción menor, de modo que puedan

constituir una sola entidad que se concierte con el Consejo de Administración, una vez constituida la sociedad anónima que ha de regir las fábricas municipales, a fin de aportar capital a ésta o para convenirse en la distribución del artículo para el abastecimiento de la capital. Los propietarios de tahonas que no rindan una producción superior a 10.000 kilos diarios o no reúnan las condiciones que exigen las Ordenanzas municipales, especialmente desde el punto de vista sanitario, no podrán continuar funcionando desde el mismo día en que las fábricas municipales sean abiertas, caso de que no hayan sido clausuradas antes por orden gubernativa; pero si lo solicitan del Ayuntamiento durante seis meses siguientes a este acuerdo, tendrán preferencia, por vía de indemnización, para suscribir acciones de la sociedad anónima municipalizada, previa la tasación de sus tahonas por el tribunal arbitral que se nombre por el Ayuntamiento, sin que esa total participación pueda exceder del 20 por 100 del capital social, sometiéndose a prorrateo por orden de fechas, caso de exceder entre los solicitantes. El Ayuntamiento, si el importe a indemnizar fuera superior al 20 por 100, acordará, con cargo a su presupuesto ordinario, la cantidad anual hasta la total indemnización.

Noveno. En los pliegos de subasta para contratar la construcción de las fábricas municipales a que hace referencia este acuerdo, se consignará el plazo máximo en el que ha de ser realizada la construcción, so pena una multa diaria durante la moratoria.

Décimo. Ínterin el período de transición de un régimen a otro, cuantas incidencias surjan relacionadas con la producción, precio y venta del pan, serán sometidas a la resolución de la Junta Central de Abastos, creada por Real decreto de 18 de enero próximo pasado.

El Ayuntamiento resolverá como mejor proceda.

Madrid, 26 de febrero de 1923.

Joaquín Ruiz Giménez.